

Tratamiento de datos realizados a bordo de buques. Informe 0334/2005.

La consulta plantea si deberá darse cumplimiento a lo establecido en la legislación española de protección de datos, contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y sus disposiciones de desarrollo en relación con los tratamientos efectuados a bordo de un buque de nacionalidad no española que atraviesa aguas españolas.

Según dispone el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 15/1999 “Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:

- a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.
- b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional público.
- c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito

Este precepto debe ponerse en conexión con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que establece lo siguiente:

“1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando:

- a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo responsable del tratamiento esté establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable;
- b) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado miembro, sino en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público;
- c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios,

automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea.

2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento deberá designar un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro, sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.”

En definitiva, el supuesto planteado se encontraría sometido a la Ley española en caso de que pudiera considerarse el buque al que la consulta se refiere un establecimiento del responsable del fichero ubicado en España o que se utilizasen en el tratamiento medios ubicados en territorio español.

A nuestro juicio, el hecho de que el buque atraviase aguas españolas no implica que los medios empleados para el tratamiento se encuentren ubicados en territorio español, habida cuenta que la expresión contenida en el artículo 4.1 c) de la Directiva debe considerarse aplicable a aquellos medios ubicados en dicho territorio de una forma permanente, como por ejemplo, si en la transmisión de los datos fuera empleada una red pública de comunicaciones electrónicas ubicada en España, pero no a aquellos casos en los que la ubicación de los medios del tratamiento sea meramente accidental o contingente, dado que en ese caso, resultará obvio que esa contingencia implicará que el medio sea, en el peor de los supuestos “de mero tránsito”.

Por otra parte, ni en la Convención de Ginebra de 1958 sobre el Derecho del Mar ni en la más reciente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, ratificada por España por Instrumento de 20 diciembre 1996, contienen previsión alguna de la que pueda desprenderse que el hecho de que un buque atraviase aguas jurisdiccionales de un determinado Estado convierta al mismo en un “establecimiento” situado en dicho Estado, por lo que tampoco sería aplicable el apartado a) del citado artículo 4.1 de la Directiva.

De todo ello se desprende que, salvo que los datos objeto de tratamiento a bordo del buque sean transmitidos a un fichero ubicado en España, no será necesario en relación con dichos tratamientos el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación española en materia de protección de datos, toda vez que el tratamiento no se encontrará sometido a la misma.